

MINUTA LEGISLATIVA

La ley N° 21.280, sobre el ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral, se creó con la finalidad de otorgar interpretación al inciso primero del artículo 485 del Código del Trabajo, señalando que las normas de dicho artículo, y los siguientes del mismo cuerpo legal, contenidos en el artículo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V, son aplicables a todos los trabajadores, incluidos aquellos a los que se hace referencia en el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en los incisos primero y tercero de ese mismo artículo. Así mismo, serán aplicables también a los trabajadores que desempeñan funciones en los órganos que se señalan en los Capítulos VII, VIII, IX, X y XIII de nuestra Constitución Política de la República, como a aquellos que sus propias leyes declaren autónomos.

De dicho modo, la redacción del referido artículo, pudiese dar pie a interpretaciones de carácter contradictorio en cuanto a la aplicabilidad del procedimiento de tutela laboral hacia las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

Por lo anterior, es que por una parte procede la aplicabilidad de la tutela laboral a los órganos previamente descritos en el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo, lo cual implicaría a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Públicas, toda vez que estas constituyen parte de la Administración del Estado. No obstante, la Ley N° 21.280 señala en su artículo 1° los órganos establecidos en la Constitución Política de la República a los cuales hace extensiva la aplicabilidad del procedimiento de tutela laboral, describiendo que será aplicable a los trabajadores que desempeñen funciones en los órganos expresados en los Capítulos VII, VIII, IX, X y XIII de la Carta Magna, y a aquellos en que sus propias leyes declaren como autónomos; encontrándose así excluidos de esta situación las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, al no encontrarse mencionado el Capítulo XI de la CPR al cual corresponden.

Sin embargo, y por norma general, conforme a lo descrito en el Código del Trabajo a través del inciso tercero del artículo 1, sus normas no se aplican a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, por cuanto estas se rigen mediante un

estatuto especial que las regula. Esto, debido a la naturaleza propia de las funciones que cumplen aquellos funcionarios que forman parte de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y que dice relación con la exigibilidad de compromiso, lealtad, jerarquía y disciplina militar y policial.

Por su parte, la ley N° 18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, establece mediante su primero artículo, en los incisos tercero y cuarto que el personal que desarrolla funciones en la institución, deberá ajustarse a las normas jurisdiccionales, disciplinarias y administrativas que establece la misma ley. Así mismo, señala que el personal que infrinja con sus deberes u obligaciones incurrirá en responsabilidad administrativa.

De igual modo, la misma legislación, establece en su Título II la Carrera Profesional, regulando el ingreso, formación, el perfeccionamiento, la capacitación, calificación, los ascensos, incluyendo a su vez un párrafo especial en donde se abordan las materias de jerarquía, grados, antigüedad y rango. A su vez, el Título III desarrolla el concepto del Mando, el cual es total y se ejerce en todo momento y circunstancia, no teniendo mayores restricciones que las establecidas expresamente en las leyes y reglamento.

Por lo anterior, es que resulta innecesaria la aplicación de la ley N° 21.280, así como otras normas que no sean sus propios estatutos, debido a las características especiales de las funciones de quienes conforman estas instituciones, y a su vez, debido a que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de Orden y Seguridad Pública cuentan con estatutos particulares, que son aplicables a su personal, en donde contemplan y describen los procedimientos disciplinarios y las reclamaciones que les son aplicables. Así mismo, es aplicable a dichas instituciones, el artículo 160 del Estatuto Administrativo; contando así con herramientas e instancias de protección ante eventuales vulneraciones de sus derechos.

Por lo anterior, y una vez detectada la necesidad de explicitar en la interpretación que hace la ley N° 21.280, respecto de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, para efectos de los procedimientos de la tutela laboral, respecto de que se regirán por sus propios estatutos disciplinarios, o bien, por la aplicación del artículo 160 del Estatuto Administrativo, es que el Ejecutivo ha presentado el proyecto de ley a través del Boletín N° 13.988-13, que busca aclarar y reforzar la aplicación de

sus respectivos estatutos en materia de tutela laboral para los funcionarios de estas instituciones.

En consecuencia, a través de un artículo único, se busca agregar al artículo 1° de la ley antes señalada, que el personal de planta, a contrata y reserva de dichas instituciones, se regirán mediante sus estatutos especiales dispuestos en sus respectivas leyes, y que no les será aplicable las normas, ni los procedimientos descritos y contenidos en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo.

MINUTA LEGISLATIVA

El avance de la pandemia del coronavirus ha provocado un cambio en la vida de las personas, además de obligar a los Gobiernos a tener que disponer de medidas que apuntan a restringir la movilidad, lo cual ha causado serios perjuicios en la economía.

Es así como las distintas industrias han debido adaptarse y hacer frente a los cambios coyunturales, afectados por la realidad sanitaria que ha tocado vivir durante los últimos meses.

Bajo este escenario, la industria de la pesca artesanal no es la excepción. Según datos proporcionados por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, existe un importante recurso correspondiente a la cuota del año 2020 que no ha sido extraído; particularmente en el caso de la merluza, la sardina, anchoveta, el bacalao, el langostino y otros.

Actualmente, la Ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura asegura que en el caso de que no se cumpla con la cuota de captura de un determinado año calendario, esta no podrá ser traspasada al periodo siguiente.

Atendiendo a lo anterior, y frente al planteamiento de múltiples organizaciones de pescadores artesanales, es que el Ejecutivo ha tomado la iniciativa de presentar ante este Senado un proyecto de ley con un artículo único, que permita una discusión con celeridad, para hacer frente al requerimiento de los gremios de poder contar con una excepción durante esta temporada, a lo dispuesto en la normativa vigente, con la finalidad de poder entregar un alivio a aquellas familias cuyo principal ingreso se centra en la actividad pesquera, y que les ha tocado enfrentar duramente la pandemia en los últimos meses.

En vista y considerando lo anterior, es que el Gobierno ha sometido a discusión el proyecto que busca establecer esta excepción a la Ley General de Pesca (Boletín N° 13.987-21), en relación al recurso no consumido de cuotas anuales de captura durante el pasado año 2020, eso sí, sin afectar la sustentabilidad en conformidad

con los requisitos y procedimientos que se regulan mediante el artículo 3° de la misma normativa.

Mediante un artículo único, la iniciativa legal contempla introducir una excepción transitoria a la Ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, que en la letra c) del inciso primero del artículo 3 establecido en Título II hace referencia a la prohibición del traspaso al periodo siguiente de la cuota no extraída.

De esta forma, se persigue que el remanente del recurso no consumido durante el año 2020, pueda ser extraído durante los primeros 15 días siguientes al inicio de la respectiva temporada del año 2021 en curso, salvo en aquellas pesquerías que hayan comenzado con anticipación a la entrada en vigencia de la ley la temporada 2021, en cuyo caso comenzará a regir desde la publicación de la normativa.

Así, se plantea que existiendo remanente, las capturas efectuadas en un comienzo se imputen a dicho remanente, y que sólo una vez ya consumido y cumplido con las respectivas cuotas -o bien vencido el plazo- estas se comiencen a imputar a la temporada correspondiente al año 2021.

De igual forma, se pretende prohibir de manera expresa las cesiones de toneladas que están reguladas en los artículos 55N y 55T de la actual Ley General de Pesca. Así, el primer artículo mencionado dice relación con la cesión de las toneladas asignadas para el respectivo año calendario, que los titulares hagan a otro titular de la misma región o bien, a titulares de otras regiones, siempre que se trate de la misma unidad poblacional, o a otros pescadores artesanales registrados para la extracción del recurso respectivo.

En tanto, el artículo 55Y dice relación con que un titular de licencia transable de pesca decida ceder de manera total o parcial, las toneladas que represente su licencia transable de pesca, en un año calendario a otros pescadores artesanales inscritos.

Así mismo, se busca establecer como límite que el remanente no consumido a extraer durante el plazo señalado en este nuevo periodo, no supere el 20% del total de la cuota de captura fijada, a fin de propiciar la sustentabilidad del recurso.

